

Editorial: Arnaldo Ríos-Alvarado

La expedición Pazcífico

Es urgente y necesario que el Estado y las políticas del postconflicto consideren el modelo económico para el Pacífico desde la conservación cultural y social que garantice la autonomía de sus comunidades... porque hoy nada ha cambiado, todo sigue igual. Las principales víctimas son los pueblos indígenas y las diásporas africanas, pues hemos sido vistos con desprecio siempre.

Parafraseando con Jorge García

La Dirección de Investigaciones de la Universidad Libre-Seccional Cali, viene estructurando la propuesta para llevar a cabo La Expedición Pazcífico, para que en el periodo 2016-2018 pueda recorrerse, desde la frontera con Panamá ubicada en las coordenadas 07° 12' 39.3" y 77° 53' 20.9" del denominado Hito 14 punto medio entre Punta Ardita, en Colombia (a 26 metros de altura) y Punta Cocalito, en Panamá; hasta la frontera en el Pacífico con Ecuador, ubicada en las coordenadas 1° 28' 10.49" de latitud norte y 78° 52' 07.27" de longitud oeste, en la bahía Ancón de Sardinas, donde el río Mataje entrega sus aguas al Océano Pacífico.

La Expedición Pazcífico implica una reflexión retrospectiva sobre múltiples escenarios, desde la violación sistemática, continua y estructural de los derechos-fundamentales de los habitantes, por parte de los grupos armados regulares e irregulares, que tienen como objetivo el desarraigo territorial de la población negra, indígena y campesina del Pacífico colombiano, utilizando señalamientos por parte de los grupos irregulares a sus habitantes de ser auxiliares de las fuerzas armadas gubernamentales y a la vez por las autoridades estatales de ser auxiliares de los grupos guerrilleros, colocándolos en estado de indefensión y riesgo de desaparecer.

Desde 1980, cuando se inyectan recursos del capital de la nueva clase emergente del narcotráfico, se inicia la arremetida en el Pacífico colombiano, afectando con "esta lógica-económica del modo de producción" muchos territorios de afrocolombianos e indígenas que pervivían en la lógica de la "Manera Cultural" con actividades de pancoger, artesanías, minería y pesca tradicional, explotación de madera, y manejo de hierbas y plantas medicinales y saberes ancestrales, dan paso a una economía extractiva en minería y la producción de narcóticos, agroindustria, grandes obras de infraestructura, que han ido erosionando el tejido social de la estructura económica afrocolombiana, indígena y campesina, transformando la tranquilidad y la cultura vernácula, en el emerger de nuevas y desconocidas formas de pobreza espiritual, que han desfigurado los valores culturales, destruido el ambiente con la presencia continua y creciente, desde 1995, de actores armados ilegales, todo ello facilitado por el total desamparo del Estado, con el objeto de transformar la estructura productiva de la región, desde el gobierno de Andrés Pastrana-1998-2002- al no-reconocer los están-

Recibido: 05/04/2015 Aceptado: 01/05/2015

<http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n2.22200> Este es un artículo Open Access bajo la licencia BY-NC-SA (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Cómo citar este artículo: RÍOS-ALVARADO, Arnaldo. Editorial:La expedición Pazcífico En: Entramado. Julio - Diciembre, 2015 vol. 11, no. 2, p. 8-10, <http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n2.22200>

dares internacionales para la protección de los pueblos afrocolombianos e indígenas que conforman el tejido social étnico-territorial, para despojarlos del control territorial comunitario -garantía de los recursos naturales- fue el primer paso para imponer la estructura de producción y el “modelo de desarrollo” centralista y “civilizador” que erosiona lentamente los territorios de propiedad colectiva y las economías comunitarias para dar paso a un modelo extractivista.

En tiempo récord, el oasis de paz que era el Pacífico, se convirtió en una de las regiones más violentas; con el asesinato de líderes comunitarios, reclutamiento forzado por parte de los grupos ilegales, masacres, “vacunas” de extorsión económica a comerciantes, empresarios, y ciudadanos corrientes para el ingreso de alimentos y mercancías. La lucha por el control del territorio y los recursos asociados al mismo, como la explotación de recursos naturales, cultivos ilícitos, rutas de tráfico de armas y de droga, ha cobrado la vida de actores de los diversos bandos, pero sobre todo de la sociedad civil que quedó bajo el terror permanente de los grupos armados.

Paralelamente, los grandes proyectos agro-industriales, por ejemplo el caso de la palma africana -citado por el Informe IWGIA 2, Bogotá 2008, El caso del Naya en el Pacífico colombiano.- informa que:

En otras zonas, como en el Alto río San Jorge, el desalojo de la población indígena Emberá Katío de su resguardo tuvo lugar para sembrar cultivos de uso ilícito. De forma general, el objetivo del desalojo ha sido la explotación a gran escala de los recursos ambientales, especialmente madereros y mineros, para ampliar los latifundios ganaderos o las plantaciones de banano, plátano, palma aceitera y coca.

El desplazamiento forzado, uno de los más altos del país, se refleja en las cifras oficiales que indican que entre el 2000 y el 2014 el número de víctimas en Tumaco fue de 105.972 y los municipios más afectados El Charco, Barbacoas, Policarpa y Olaya Herrera. Registrando, como en el caso ecuatoriano, que el 98 % de la población refugiada en su mayoría mujeres y niños, son colombianos, -según ACNUR. En el caso de los desplazados que se ubican en ciudades como Buenaventura, en el llamado de “bajamar”, son a la vez desplazados de ahí para poder responder a las exigencias del T.L.C, “En un lapso de cinco años han asesinado y “desaparecido” a más de 1.000 personas, la mitad de ellas jóvenes sin trabajo.

La documentación en los estrados judiciales deja constancia de la displicencia e inoperancia del Estado,

y algunas veces de su complicidad, como en el caso de la masacre del Naya, donde el paramilitar Ever Veloza, alias “H.H.”, jefe del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, A.U.C, dirigió la masacre de por lo menos 50 indígenas y campesinos en abril de 2001 (datos de la Fiscalía General de la Nación). “H.H.” en versión libre ante un juez de Justicia y Paz reconoció que para esta acción recibió el apoyo del Ejército Nacional. Según trabajo elaborado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA: Proceso de Comunidades Negras, PCN; Colectivo de Trabajo Jenzera.

Después de la caída del muro de Berlín, final de la guerra fría e inicio “de la paz caliente” que tiene su punto de quiebre el 11 de septiembre, cuando la lucha antidrogas es redefinida como guerra antiterrorista y las organizaciones guerrilleras y paramilitares homogenizadas e incluidas en la lista de los grupos terroristas por el Pentágono y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la solución adquiere una sola opción: la salida militar, por lo tanto, los pobladores se convierten en potenciales auxiliares del accionar terrorista, sin importar su organización como pueblos afroamericanos e indígenas.

En esta lógica de “territorio en guerra” las medidas de restricción para la movilización de personas, la compra y transporte de alimentos, medicamentos, combustible que violan el principio constitucional de libertad de movimiento, genera limitaciones extremas para el comercio, colapsando la economía local y con ella los cultivos de pancoger y tiene como consecuencia la dependencia de alimentos importados, lográndose el primer paso para la desterritorialización cultural, política y económica de las comunidades raizales, que ahora deben responder las demandas externas al territorio; en medio del fuego cruzado, las restricciones de movilidad y producción; la pérdida de formas milenarias y solidarias de vida, hacen pensar que la abolición de la esclavitud hace más de 150 años sigue siendo una declaración formal pero que lo real es una nueva economía del narcotráfico que deja al descubierto que las formas de esclavitud y explotación continúan vigentes.

El único “pecado” de la Costa Pacífica colombiana es la riqueza de sus recursos naturales; allí se encuentra el 15% de todas las plantas que se han clasificado en la historia. Una región biodiversa, donde la riqueza del subsuelo es directamente pro-

porcional a la riqueza del suelo, por lo cual la potencialidad de recursos mineros le da la estocada final y pone en peligro el abastecimiento de los pobladores locales y la riqueza de la biotecnología natural, cuya defensa está en las acciones reales cotidianas que debe emprender el Estado colombiano y no se cumplen, a pesar que algunas figuran de manera formal en las agendas de los gobiernos nacional y local.

Más trágicas aún son: Las políticas de la agroindustria de la palma africana, en Tumaco, se desarrollan de acuerdo con las lógicas globales de una “acumulación capitalista por desposesión” (Harvey, 2012). Estas políticas han suscitado problemas de expropiación territorial y desplazamientos forzados. Así también, han generado formas modernas de colonización de la vida humana y de la naturaleza a través de las cuales se imponen prácticas económicas externas a los modos locales de vida de las comunidades negras (Escobar, 2010).

Los puntos de cruce entre la violencia armada, el desplazamiento forzado y la economía sostienen formas de fascismo social, (Boaventura, 2004),

de dominación y explotación contemporánea para la producción y reproducción del capital. El fascismo social es un fenómeno plurifacético que se manifiesta a través de la desposesión territorial, la supresión de las economías propias, el envenenamiento de animales y cultivos para el autoabastecimiento, la segregación social de los excluidos a partir de las divisiones raciales y clasistas.

En este contexto se plantea la Expedición Pazcífico, para encarar una región-laboratorio viviente e inexplorado, eso sí sobre-diagnosticado. La Expedición Pazcífico no intentará otro diagnóstico adicional, sino incorporar la ciencia y la tecnología a problemas reales y sentidos de la poblaciones y el ambiente, donde se definirá la parte esencial del postconflicto y la necesidad de apostar a la re-territorialización de la región Pacífico, reincorporando a las comunidades el tejido social que les devuelva las condiciones organizativas y anímicas para mantenerse en una resistencia pro-activa, para el retornar de los desplazados a sus comunidades, reconstruyendo el tejido social para garantizar la recuperación de la solidaridad ancestral y las prácticas productivas autónomas, que aseguren la identidad cultural, social, económica, productiva y territorial conectadas al mundo global.

Las universidades, los grupos de investigación y los investigadores deben vincularse de manera real y efectiva, aportar sus saberes académicos y científicos y atender la demanda de solución a problemas reales y cotidianos quej permita mejorar significativamente las condiciones de vida y trabajo de la población local siempre en armonía con el ambiente.

Las tareas de articulación del gobierno central con los gobiernos locales deben intensificarse vinculando el mayor número de actores sociales posibles: sociedad civil, empresarios, universidad, cámaras de comercio, SENA, gerencia del Pacífico, fuerzas armadas, puertos de Colombia, consejos comunitarios, resguardos indígenas, transportistas marítimos , terrestres y aéreos, empresas de turismo, para lograr un mayor equidad en la implementación de acciones del postconflicto.

La Expedición Pazcífico se organiza con la mirada en la construcción cotidiana de la utopía que permita una segunda oportunidad sobre la tierra y el mar para quienes habitan el Pacífico.